

FUNDACION FELIPE HERRERA LANE

INFORME DE TENDENCIAS

Septiembre 2019

Las reiteradas acusaciones de obstruccionismo del gobierno a la mayoría opositora

En reiteradas ocasiones, tanto el Presidente de la República como algunos de sus ministros han acusado a la mayoría parlamentaria en manos de la oposición de un verdadero obstruccionismo legislativo, instándolos a una rápida aprobación de sus proyectos emblemáticos, como la reforma tributaria, de pensiones y de adaptabilidad o flexibilización laboral que, según sus propias declaraciones, representan “el corazón” del programa de gobierno ofrecido al país, a la par que busca descalificar los fundamentos de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, sosteniendo que carece de verdaderos argumentos jurídicos sino tan sólo políticos.

En consonancia con su estrategia de intentar dividir a la oposición entre “patriotas y antipatriotas”, abiertos al diálogo y la búsqueda de acuerdos, y sectores refractarios a todo diálogo y consenso, el gobierno ha centrado su presión en las bancadas de la DC, sectores independientes y radicales. Buscando construir mayorías circunstanciales, con las menores concesiones posibles. Ninguna que pueda afectar la esencia misma de los proyectos, como ha demandado en Chile Vamos y los propios sectores empresariales.

Tanto la escasa disposición del Ejecutivo para flexibilizar algunos de los proyectos, buscando construir consensos más amplios e incluyentes, como el propio gobierno maneja la agenda legislativa, sin prioridades claras (frenesí legislativo), contribuyen a trabar la agenda legislativa.

Tal como lo ha declarado el propio Presidente de la República, el gobierno está empeñado en acelerar la aprobación de sus proyectos emblemáticos durante la actual legislatura y no parece contar con nuevos márgenes de flexibilidad para acoger nuevas indicaciones de la oposición.

Parece haber llegado la hora en que las bancadas parlamentarias de la oposición busquen sincerar el supuesto “bloqueo” a la agenda oficial, mostrando las diferencias que aún subsisten en relación con la reforma tributaria, incluido el sensible tema de la reintegración, la mantención de la progresividad del sistema tributario alcanzado en la anterior reforma y su neutralidad en materia de recaudación fiscal.

Inevitablemente el debate sobre la reforma tributaria se vincula con la discusión del presupuesto para el año próximo, en donde el gobierno, de manera bastante imprudente, ha incluido ingresos potenciales que sólo se asegurarían con la aprobación de la reforma en la manera como ha sido despachada desde la Cámara de Diputados, con los votos de un sector minoritario de la oposición. Y es más que evidente que este proyecto, al igual que los otros proyectos emblemáticos del gobierno, tendrá modificaciones durante su tramitación en el Senado.

Algo parecido sucede con el proyecto de reforma de la previsión, con diferencias sustantivas respecto de un mejoramiento de las actuales pensiones de una manera menos gradual que la propuesta, una mayor solidaridad en el sistema, y diversificación en su administración.

Finalmente está el tema de la reducción de la jornada laboral, en donde el gobierno se ha perdido una gran oportunidad de intentar compatibilizar la propuesta de la diputada Camila Vallejo, de reducción de la jornada laboral a 40 horas, introduciendo nuevos criterios de gradualidad y flexibilidad, que no afecten las conquistas laborales y eviten los riesgos de precarización del empleo.

El gobierno debe asumir con realismo que no cuenta con una mayoría parlamentaria que le permita aprobar su controvertida agenda con marcado acento neo liberal y que debe estar abierto a una negociación y búsqueda de acuerdos con el conjunto de la oposición, acogiendo propuestas e indicaciones que diversos sectores han formulado.

La acusación constitucional como “una prueba de fuego” para la oposición

Constituiría un grave error de la oposición asumir la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos como “una prueba de fuego” en materia de unidad de la oposición, toda vez que un sector de la DC parece estar a favor de darle curso en la Cámara de Diputados.

La unidad de la oposición, aún una unidad de “geometría variable”, de carácter instrumental, representa una necesidad ineludible y de supervivencia para el conjunto de la oposición. La división y disgregación tan sólo puede favorecer a la derecha en su explícito propósito de proyectarse a futuro.

Y obviamente debe ser asumida como una unidad construida a partir de la diversidad, respetando la legítima competencia y necesidad de perfilamiento de los diversos sectores, sin olvidar los objetivos superiores para construir una mayoría social y política a favor de los cambios y transformaciones.

En este sentido, las diferencias y contradicciones que se aprecian al interior de la DC no pueden ser ajenas para el conjunto de la oposición. Como no le son ajenas al gobierno, que permanentemente busca atraer a ese partido hacia la derecha. Un veto a la posibilidad de suscribir acuerdos electorales con la DC, o condicionarlos a la votación de una acusación constitucional, es auto infringirse una derrota y contribuir a una victoria del gobierno.

Efectivamente existe el riesgo que el gobierno consiga los seis votos de diputados de oposición que se requieren para no aprobar su presentación al Senado. La directiva de la Democracia Cristiana ha decretado libertad de acción para que sus diputados la voten en conciencia y no tan sólo parlamentarios de ese partido han expresado sus dudas o reservas en relación a sus fundamentos (entre ellos José Auth, Jaime Mulet, Matías Walker, Miguel Ángel Calisto y otros).

Sin lugar a dudas su rechazo en la Cámara baja constituiría un triunfo para el gobierno, que ha desplegado una intensa campaña comunicacional (con apoyo de sectores de la DC) para “blindar” a una de las ministras más duras e ideológicas del gabinete, que la UDI asume como una carta electoral, y una dura derrota para el conjunto de la oposición y especialmente para el Partido Socialista, que ha asumido un claro protagonismo en torno a esta acusación.

Pero la oposición no puede asumir una fractura de graves consecuencias políticas y electorales no tan sólo de cara a la próxima elección municipal y de gobernadores regionales. Sobre todo en los momentos en que sectores identificados con el progresismo en dicho partido buscan rectificar la línea política impulsada por la actual dirección partidaria, en tanto que connotados senadores de ese partido se han pronunciado por impulsar nuevas indicaciones a los proyectos del gobierno. En especial respecto a la reforma tributaria, la reforma previsional y la jornada laboral.

Es más que evidente que si la DC termina apoyando todos y cada uno de los proyectos del gobierno en la forma como están actualmente diseñados, se incrementan los riesgos de quiebre y fractura al interior de la oposición, dificultando las posibilidades de suscribir acuerdos o pactos electorales. Por estas mismas razones, parece indispensable extremar los esfuerzos por construir consensos mínimos en las bancadas senatoriales de la oposición para enfrentar el debate legislativo en torno a estas materias.

Tanto el senador Jorge Pizarro, como Francisco Huenchumilla e incluso la senadora Ximena Rincón , ha enfatizado la necesidad de introducir nuevas indicaciones a los

proyectos, que bien pudieran concitar consensos al interior de la oposición, poniendo en duros aprietos al gobierno, que debiera asumir que no cuenta con una mayoría parlamentaria para aprobarlos tal cual están hoy día están.

Esta nueva fase legislativa ofrece no tan sólo la oportunidad de escuchar las opiniones de diversos expertos o dirigentes sociales, sino también buscar diálogos directos tanto con empresarios como con dirigentes sindicales (CPC, SOFOFA, CUT, ANEF, ANICH, etc.) que permita acercar posiciones y buscar consensos posibles para resolver las diferencias.

Todo lo anterior buscando no tan sólo destrabar la agenda legislativa y construir consensos posible entre el gobierno y el conjunto de la oposición sino también mantener el diálogo y la búsqueda de acuerdos políticos y electorales, aún de carácter instrumental, en el seno de la oposición.

La realización de la COP25 en nuestro país y la negativa del gobierno de suscribir el pacto de Escazú

El Presidente Sebastián Piñera ha reiterado su negativa a suscribir el pacto de Escazú argumentando los riesgos que supone para nuestro país ceder soberanía y abrir la puerta a nuevas acciones jurídicas de Bolivia en su histórica reivindicación de una salida soberana al mar.

Sin lugar a dudas ello representa un contrasentido con sus enfáticas declaraciones en la reciente Asamblea General de Naciones Unidas a favor de la defensa del Medio ambiente y la lucha en contra del cambio climático. Sobre todo en los momentos en que nuestro país ha asumido la organización de la cumbre climática que inevitablemente pone de relieve los problemas medio ambientales que arrastra nuestro propio país, incluyendo las llamadas “zonas de sacrificio”, el tema del agua, agravados por la severa sequía que afecta al país, además de los temas de la Araucanía y los numerosos conflictos medio ambientales en diversas regiones del país.

No es evidente que la suscripción del pacto de Escazú implique los riesgos para nuestra soberanía que aduce el gobierno y entrega una muy mala señal acerca de su compromiso con la defensa del Medio Ambiente y la lucha en contra del calentamiento global.

Es más que evidente que el tema del calentamiento climático ha generado mayor conciencia y sensibilidad respecto de los temas medio ambientales, como lo demuestran las masivas movilizaciones no tan sólo en nuestro país sino a nivel global. Y ello debiera traducirse en una renovada agenda política y legislativa en torno al tema.

La reforma del código de aguas propuesta en el gobierno anterior y que aún se debate en el parlamento pareciera tener prioridad, junto con una activa política para enfrentar la severa y prolongada sequía que afecta al país. Ello debiera verse reflejado en la presupuesto del año próximo, junto con una reforzada agenda en defensa del medio ambiente.

Las próximas elecciones en Bolivia, Argentina y Uruguay, así como la propia crisis institucional que hoy se vive en Perú, dibujaran un nuevo mapa político en la región y obligan a nuestro país a ajustar su política regional y vecinal

Sin lugar a dudas las próximas elecciones presidenciales en Bolivia (20 de octubre), Argentina (27) y Uruguay (27) contribuirán a dibujar un nuevo mapa político en la región, que pudiera sumarse la manera como Perú resuelva la crisis institucional que hoy enfrenta a Martín Viscarra con el parlamento de ese país.

Un nuevo mapa político que amenaza con acortar dramáticamente el famoso ciclo de gobiernos de derecha o centro derecha en la región y que obliga a nuestro país a ajustar su política regional o vecinal, marcada por un cierto ideologismo, una cierta tendencia a la política de bloques (Grupo de Lima, PROSUR), expresada en una agresiva y poco realista política hacia el gobierno venezolano, una desconsideración a las relaciones vecinales, un riesgosa proximidad al gobierno brasileño y marcadas distancias con el sector político que probablemente conquistara la presidencia en Argentina.

La política regional o vecinal de nuestro país no puede estar determinada por el signo político de los gobiernos en la región. Las relaciones son entre Estados y deben servir al interés superior del país, más allá de las contingencias políticas.

La probable derrota de Mauricio Macri en Argentina pone fin a unas relaciones amicales, establecidas entre el Presidente chileno y el mandatario argentino, pero está en el mejor interés del país, mantener las más estrechas relaciones de cooperación no tan sólo con ese país sino que con los países vecinos y a nivel regional. Una política fundada en el multilateralismo y la búsqueda de la integración regional.

La propuesta de PROSUR ha terminado por apuntar a un FORO de consulta y debate regional que no incluye el conjunto de los países de la región y de muy dudosa utilidad para avanzar en los procesos de integración regional. Desde luego ese FORO no reemplaza los esfuerzos de integración del Cono Sur, como si se propuso el fracasado esfuerzo de UNASUR.

La propia crisis de la OEA, fuertemente tensionada por la imprudente y agresiva política en contra del gobierno venezolano, obliga a nuestro país a ajustar su política

regional, abandonando alineamientos de carácter políticos o ideológicos para concentrarse en el diseño de una política de mayor realismo, pragmatismo y cooperación del conjunto de la región, más allá de las diferencias políticas, basada en principios universales y los intereses nacionales de cada uno de sus integrantes.

La preocupante situación que hoy se vive en Venezuela se ve agravada por la imprudente invocación al Tratado de Asistencia Recíproca TIAR y las nuevas sanciones en contra del gobierno de Maduro, aprobadas por 16 de los 19 países signatarios. Tanto el fracaso del diálogo auspiciado por el gobierno de Noruega, como la tensa situación que hoy se vive en la frontera entre Venezuela y Colombia, bien pudiera derivar en confrontaciones bélicas o una intervención extranjera, que la mayoría de los países de la región dice descartar.

Parece haber llegado la hora de sumar los esfuerzos del conjunto de la región, además de buena parte de la comunidad internacional, a favor de una salida política negociada a la crisis venezolana.

FUNDACIÓN FELIPE HERRERA
PDTE. JUAN ANTONIO RÍOS N° 58 – PISO 3 (26 33 99 79)